



Documentos de Estudio

¿Modernización o desarrollo?

Alain Touraine

Centro de Estudios de Gobierno (CEGOB)
Universidad Católica Argentina – Campus del Rosario
Av. Pellegrini 3314 – S2000
Rosario – Argentina
uca.edu.ar/rosario
cegob@uca.edu.ar

El siguiente es un extracto del libro *¿Qué es la democracia?*, de Alain Touraine, publicado en 1994. El autor expone su visión sobre los problemas de la estabilidad democrática, considerando tanto la perspectiva institucional como económica, política y cultural. En este capítulo, Touraine profundiza sobre la reproducción de las condiciones materiales y la trascendencia que ésta tiene en la continuidad democrática y la búsqueda de condiciones internas de permanencia y estabilidad. Aquí se emplea la edición de Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

Liberalismo económico y liberalismo político

Para muchos, la economía de mercado y la democracia política son las dos caras de la misma moneda. ¿No tienen en común la limitación del poder absoluto? A la inversa, ¿no estuvo nuestro siglo dominado por Estados a la vez autoritarios y económicamente voluntaristas? ¿No asistimos, en las dos últimas décadas del siglo, al agotamiento de este modelo de Estado, al triunfo de la economía de mercado y al retorno a la democracia en regiones de donde había sido expulsada, como varios países de América Latina, o bien donde nunca o casi nunca se había instaurado, como la Europa poscomunista, con excepción de Checoslovaquia que había conocido, después de su creación, una verdadera democracia? Al quitar al Estado el control directo de la economía, al separar el poder político del poder económico, ¿no se perjudica al Estado absoluto y se posibilita que el debate político se desarrolle libremente?

Esta argumentación entraña una parte de verdad. Hay que aceptar la idea de que la democracia corre un gran peligro allí donde el Estado gobierna directamente la economía. La economía de mercado es verdaderamente una condición necesaria de la democracia, porque limita el poder del Estado. Constatación que contradice la ideología que identifica la democracia con una voluntad popular contenida en un Estado o un partido de vanguardia capaz de derrocar, si es preciso apoyándose en la violencia callejera, la dominación de una clase o una elite dirigente. Ideología muy discutible, ya que nada demuestra que el derrocamiento de una dominación social entrañe la creación de una democracia política. Que muchos revolucionarios tuvieron como meta y como anhelo la extensión de las libertades democráticas es cierto, pero no se ve por qué necesidad un cambio de sociedad habría de crear una democracia política que estuviera forzosamente ligada a él. Debilidad de análisis que vuelve a encontrarse en la argumentación liberal, cuando afirma, más allá del hecho reconocido de que la libertad de la economía con respecto al Estado es una condición de la democracia, que ésta es su condición suficiente o incluso la causa determinante. Llegamos con ello rápidamente a una fórmula más equilibrada: no hay democracia sin economía de mercado, pero hay muchos países de economía de mercado que no son democráticos. La economía de mercado es una condición necesaria pero no suficiente de la democracia. ¿No vemos en muchas regiones dictaduras que quiebran un Estado dirigista, imponen la economía de mercado y favorecen la asignación de los recursos a través del mercado mundial? ¿No vemos a regímenes tan autoritarios como el de China asumir la iniciativa de desarrollar, en sectores cada vez más vastos, la economía

de mercado y la penetración de los capitales extranjeros? En América Latina, en la Argentina o en Chile, ¿no proclamaron las dictaduras militares su liberalismo económico? Remontándonos mucho en el tiempo, ¿no se advierte que Gran Bretaña, centro del mercado mundial durante todo el siglo XIX, no generalizó empero el derecho al voto para los hombres sino con las reformas de 1884-1885, por lo tanto, muchas décadas después de la elección de una economía de mercado abierta al comercio internacional? Para transmitir todos sus efectos, la economía de mercado necesita un Estado eficaz, políticas económicas adaptadas, buenos medios de comunicación y un alto nivel de educación en el conjunto de la población; pero, ¿para qué habría de necesitar democracia? La economía liberal recela del control de la economía por el poder político, pero un poder no democrático puede ponerse al servicio de la acumulación del capital, mientras que un régimen democrático puede olvidar las necesidades de la economía, preocuparse sobre todo por proteger intereses adquiridos o satisfacer reivindicaciones particulares antes que asegurar la movilidad de los factores o la coherencia de la política económica.

Es preciso, por lo tanto, invertir el razonamiento habitual. En lugar de considerar a la democracia como el acompañamiento político del desarrollo económico, hay que preguntarse en qué condiciones la economía de mercado conduce al desarrollo y cuál es el papel de la democracia en ese pasaje. El desarrollo, y más precisamente el desarrollo autosostenido, es decir endógeno, responde a tres condiciones principales: la abundancia y la elección adecuada de las inversiones, la difusión en toda la sociedad de los productos del crecimiento, la regulación política y administrativa de los cambios económicos y sociales en el plano del conjunto nacional o regional considerado. En términos aún más concretos, la transformación de la economía de mercado en desarrollo supone un Estado capaz de análisis y decisión, empresarios y fuerzas de redistribución. Ahora bien, estos tres agentes del desarrollo tienen relaciones estrechas con los tres componentes de la democracia que pusimos de relieve y definimos desde el comienzo. En primer lugar, no hay democracia, y tampoco desarrollo, sin ciudadanía, es decir sin conciencia de pertenencia a un conjunto nacional regido por leyes. Lo que el análisis del desarrollo añade aquí es que la ciudadanía supone la existencia de un Estado cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la sociedad nacional, a la vez mediante la modernización económica y la integración social. En segundo lugar, la representación de los intereses, si es un componente de la democracia, es también un factor de desarrollo, ya que es o puede ser un equivalente de un proceso de redistribución de los resultados del crecimiento y por lo tanto de integración social. Por último, la inversión conduce al desarrollo y a la industrialización, porque quiebra los mecanismos de reproducción social en beneficio de las libertades y sustituye los antiguos principios de orden por un principio de movimiento.

¿Puede sacarse de estas comparaciones una conclusión extrema y decir que desarrollo y democratización son sinónimos? En verdad, ésta es la idea central de este capítulo. Si los dos términos no son completamente inseparables, es porque el desarrollo, como la democracia, es un proceso siempre desequilibrado, abierto, repleto de asincronías, de conflictos y hasta de rupturas entre sus tres componentes. La acumulación de recursos puede dar un privilegio excesivo a la inversión sobre el reparto e incluso a la especulación sobre la inversión, en tanto que una contraofensiva en favor de un mejor reparto puede debilitar la inversión. Aun en situaciones tan

controladas como las de Europa occidental se han visto desfases importantes entre los dos aspectos complementarios del desarrollo, al mismo tiempo que la gravedad de las crisis de ciudadanía. La democracia es un sistema de gestión política del cambio social y, por su lado, el desarrollo es un conjunto de relaciones sociales al mismo tiempo que una política económica. La integración de los actores sociales y económicos del desarrollo no es espontánea; está incluso amenazada por la lógica propia de cada uno de ellos, que corre el riesgo de entrar en conflicto con la de los demás y desarticular la sociedad. Es la democracia, debido a que da al sistema político un papel de mediación entre los actores sociales y entre éstos y el Estado, la que mantiene unidos los componentes del desarrollo. El desarrollo no es la causa sino la consecuencia de la democracia.

Entre el voluntarismo del Estado y el racionalismo económico

Esta argumentación trae a la mente una objeción inmediata: esas relaciones entre democracia y desarrollo, que pueden observarse en países ya próximos al desarrollo endógeno, parecen lejos de la realidad de los países en desarrollo, es decir que no están en condiciones de producir un desarrollo endógeno. En esos países, sólo un Estado voluntarista, o en ocasiones el capitalismo extranjero, puede provocar el despegue y en especial la ruptura de las antiguas oligarquías. ¿Hay que concluir de ello que la modernización es enemiga de la democracia, aun cuando ésta sea una condición del mantenimiento del nivel de modernidad ya alcanzado? Muchos piensan que en el momento del despegue es necesaria la dictadura, la de la burguesía capitalista o la del Estado socialista o nacionalista, y que es únicamente al alcanzar la velocidad de crucero cuando puede interrumpirse el control político del cambio social e introducirse la democracia, antes de que ésta se convierta en una condición del desarrollo endógeno.

Tal fue la convicción de los despotismos ilustrados del siglo XVIII, lo mismo que la de los nacionalismos modernizadores autoritarios del siglo XX, de la Turquía kemalista al Egipto nasserista, de la Yugoslavia de Tito al Brasil de Getulio Vargas. El papel de los Estados voluntaristas fue predominante en esas experiencias, mientras que la democracia aparecía como el estandarte político de los intereses de una oligarquía extranjera o ligada al extranjero. Lo cual explica que haya sido vilipendiada por tantos revolucionarios que querían liberar a sus pueblos de los privilegios defendidos por partidos políticos enfeudados a la oligarquía, como lo estuvieron durante mucho tiempo los partidos latinoamericanos hasta que la revolución mexicana transformó la vida política del continente.

Sin embargo, es preciso romper con esta representación y aceptar una visión más crítica de esos regímenes voluntaristas. Sólo desempeñaron un papel modernizador cuando crearon una primera forma de interdependencia entre actores políticos, económicos y sociales, lo que ocurrió con frecuencia. El Estado fue a menudo el principal inversor, por ejemplo, en Brasil, en la Argelia independiente y en la mayoría de los países en vías de industrialización. También movilizó una conciencia nacional en formación o se apoyó en las masas urbanas engrosadas por la modernización económica. Por último, el Estado autoritario fue modernizador cuando creó una administración moderna, luchó contra la corrupción, hizo respetar las leyes. No basta con que el Estado se aparte

de los intereses particulares para conseguir una modernización a marchas forzadas; al contrario, sólo el Estado movilizador, agente de formación de actores económicos, sociales y administrativos, puede desempeñar un papel decisivo en el desarrollo. Puesto que pone término a la fragmentación de una sociedad en la que la oligarquía tenía objetivos económicos indiferentes a los problemas sociales y políticos de su país, donde los actores sociales defendían costumbres en vez de procurar utilizar en su beneficio los mecanismos generales de cambio social, donde el Estado estaba más preocupado por el tamaño, la conquista o la acumulación de recursos que por el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Es cierto que la ruptura de esta sociedad tradicional se opera las más de las veces de manera autoritaria. Pero no es posible confundir con el Estado autoritario patrimonial, represivo o puramente guerrero el Estado movilizador, que puede ser una etapa en la formación de actores sociales autónomos y que puede preparar así un desarrollo endógeno fundado en la democracia. Es en el momento en que este Estado movilizador está carcomido por el clientelismo, la corrupción o las disensiones internas cuando interviene un Estado autoritario antipopular, cuya acción, sin embargo, puede ser favorable al desarrollo si la tarea más urgente es liberar a los actores sociales de controles y prioridades contrarios a las necesidades económicas. Una vez más, en este caso no puede tratarse sino de una intervención breve; si no es así, el conjunto del proceso de desarrollo es bloqueado por un Estado que defiende sus intereses más que los de la sociedad y considera la represión más que la apertura y la relación entre la inversión y la distribución. En resumidas cuentas, el desarrollo sólo se produjo cuando el pasaje por el Estado voluntarista no fue más que un desvío necesario para llegar al desarrollo endógeno. Cuando el despotismo ilustrado se convirtió en su propio fin, cuando su poder se hizo absoluto, el desarrollo quedó paralizado, asfixiado, y el Estado voluntarista se derrumbó en el caos y el subdesarrollo. El desarrollo pasa por el Estado, siempre y cuando el trayecto sea un ida y vuelta de la sociedad hacia él y de éste hacia aquélla. El desarrollo es imposible si el Estado sólo busca su propio enriquecimiento, como ocurre en algunos países productores de petróleo, donde se procura ante todo controlar a la sociedad en vez de transformarla.

Lo que la mayor parte de las veces impone esa vuelta hacia la sociedad contra la resistencia del Estado despótico es el fracaso del mismo Estado voluntarista, fracaso por explosión en el caso del nazismo y del militarismo japonés, por implosión en el del sistema soviético o el militarismo argentino, que provoca el caos y abre camino a la reconstrucción, siempre difícil, de la sociedad civil. En el caso de Japón y Alemania, países que habían alcanzado un alto nivel técnico y profesional en el momento de su caída, la intervención americana desempeñó un papel fundamental en la reorientación hacia la democracia y el desarrollo endógeno. En otros países, fue el sometimiento al mercado mundial el que sucedió al derrumbe de regímenes nacional populares o al agotamiento de las dictaduras militares que los habían derrocado. Volvemos a encontrar aquí el razonamiento seguido desde el comienzo de este análisis: la economía de mercado, definida como destrucción de los controles políticos de la economía, libera a ésta de la dominación del Estado o la oligarquía; es una precondition del desarrollo. Con frecuencia son regímenes autoritarios los que imponen el pasaje a la economía de mercado, como ocurrió en Chile y como está ocurriendo en Perú con el

golpe de Estado, autogolpe*, de Alberto Fujimori, después del fracaso de Alan García. Pero una vez realizada la gran transformación, la democracia, definida ante todo como la autonomía de la sociedad política, es el principal medio de crear un desarrollo endógeno, aunque éste comience las más de las veces por un largo período de acumulación de capitales y con la capacidad de decisión en manos de una clase o una elite dirigente. El final del siglo XX ya no está dominado por el poder de Estados nacidos de movimientos de liberación nacional o de rupturas revolucionarias; lo está por el agotamiento de esas políticas voluntaristas, a veces rápido, como en el caso del Egipto nasserista o del FLN argelino, otras más lento y parcial, como en el del nacionalismo, mezclado con cierto populismo, de Brasil y México.

La democracia tiene como efecto principal asegurar la redistribución del producto nacional. Pero al limitar el poder del Estado, permite también a éste actuar como agente del desarrollo. Es lo que busca la revolución democrática italiana que lucha contra la corrupción, la influencia de la mafia, el deterioro del servicio público, objetivos que en último término gobiernan la búsqueda de una vigorosa modernización económica. Finalmente, fortalece la unidad nacional, al dar al mayor número de personas cierto acceso a las decisiones y los créditos públicos.

Democracia y desarrollo sólo pueden vivir unidos uno al otro. Un desarrollo autoritario se asfixia y produce crisis sociales cada vez más graves. Una democracia que se reduce a un mercado político abierto y no se define como la gestión de los cambios históricos se pierde en la partidocracia, los lobbies y la corrupción. Esta conclusión no equivale a la tesis clásica, tan bien presentada por S. M. Lipset, de la correlación entre modernización económica y democracia política, y por lo tanto del papel determinante de la primera como elemento de apertura y diversificación de la sociedad. Antes bien, hay que reconocer la oposición de dos concepciones igualmente coherentes. Si la modernización es definida como la diferenciación creciente de subsistemas, cada uno de los cuales está regido por una forma específica de racionalidad, la democracia, por su lado, lo es como la ausencia de todo poder global y por lo tanto como el producto final de una evolución gobernada por el triunfo de la racionalidad instrumental y el individualismo. Si, al contrario, se define el desarrollo como la gestión política de las tensiones sociales entre la inversión económica y la participación social, la democracia aparece como la condición, y ya no únicamente como el resultado, de esta gestión; posición que es la que defiende aquí.

Después de la Segunda Guerra Mundial y el doble derrumbe de los Estados fascistas y los imperios coloniales, triunfó el tema de la modernización; la idea de desarrollo se opuso a esta concepción liberal, y no es por azar que Alfred Sauvy denominó Tercer Mundo a los países en desarrollo, identificándolos así con una lucha de emancipación y progreso que había sido la del Tercer Estado en Francia en 1789, y que unía una voluntad de independencia e igualdad a la creencia en los efectos benéficos de la ciencia y la técnica. Democracia y desarrollo estaban asociados como fuerzas de liberación de la pobreza, la ignorancia y la dependencia que se fortalecían una a la otra. Pero esta alianza de la modernización económica y la liberación social y nacional se rompió muy pronto. La integración social era demasiado débil y la esperanza democrática fue reemplazada en muchos países, sobre todo en las antiguas colonias, por una movilización nacionalista que, después de haber destruido las fuerzas democráticas, hizo imposible su desarrollo duradero, como lo vimos en

especial en Egipto y Argelia. Ahora bien, estos nuevos regímenes, ya fueran autoritarios o pluralistas, se adaptaron con facilidad a una dependencia que los economistas latinoamericanos, con Celso Furtado a la cabeza, fueron quienes mejor analizaron, y que entrañaba una dualización estructural y por ende un aumento de las desigualdades sociales. Lo que condujo más o menos rápidamente, desde 1964 en Brasil y 1966 en la Argentina, en el caso latinoamericano, a una caída de los regímenes democráticos y a la victoria de las primeras dictaduras militares, a las que iban a seguir varias otras. Durante este período, ni los defensores de la modernización ni los teóricos radicales de la dependencia se refirieron más a la democracia. Los primeros se contentaban con afirmar que el crecimiento implicaría la apertura de las negociaciones sociales, porque en lo sucesivo habría un excedente a repartir; los segundos convocaban a la revolución y a una acción encaminada directamente contra el Estado pseudonacional, agente económico de una dominación extranjera.

Treinta años más tarde, el derrumbe del modelo soviético y el triunfo de la influencia americana arrastran a casi todos los países hacia una política liberal: los Estados autoritarios son denunciados como clientelistas o corruptos; las fronteras se abren a los capitales extranjeros y a los programas económicos ortodoxos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se instaura cierto pluralismo político y en todos lados se habla de democratización, de manera tan artificial como en el período anterior, cuando se calificaba de democrática la victoria del gobierno de liberación nacional. Parece haberse retrocedido a las teorías que reducían el desarrollo al conjunto de las consecuencias sociales de la modernización económica.

El lazo de la democracia y el desarrollo significa, al contrario, que no hay desarrollo sin gestión abierta de las tensiones entre inversiones y reparto, y que no hay democracia sin representación de los intereses sociales y sin preocupación por la sociedad nacional. Lo que une democracia y desarrollo es que las dos ideas introducen una imagen integrada, global del cambio social y rechazan las teorías de la modernización que describen a la sociedad como un tren cuyos vagones sociales y políticos son arrastrados por la locomotora de la racionalización y el progreso material.

Desarrollo y democracia son nociones interdependientes: cada una de ellas implica elementos económicos, sociales y políticos a la vez. Lo que las opone tanto a la concepción liberal, que insiste en la necesidad de destruir los obstáculos al libre funcionamiento de los mercados, como a la revolucionaria, según la cual la movilización política y social puede provocar directamente el crecimiento económico. Desarrollo y democracia se colocan ambos a medio camino del objetivismo de los liberales y del subjetivismo de los revolucionarios. Dan prioridad a la creación de un sistema político autónomo, capaz de manejar las relaciones entre cambios económicos y organizaciones sociales o culturales. Una vez más, hay que comprometerse con una definición precisa de la democracia y no satisfacerse con llamar democráticos a los regímenes no autoritarios. En ese caso, podría llamarse democrático a cualquier lugar de intercambio de mercancías o personas, un puente, una estación, un tren subterráneo, desprovisto de autoridad política y reducido a una pura función económica.

El desarrollo endógeno

La democracia está directamente asociada al desarrollo endógeno. Este vínculo no proviene del hecho de que una sociedad ya modernizada tiene la capacidad de producir nuevos cambios sin ejercer fuertes coacciones sobre sus miembros, sino de que el carácter endógeno de la modernización implica la existencia de un sistema de gestión democrática de las relaciones sociales. Los países cuya modernización es exógena están, al contrario, sometidos a un agente exterior todopoderoso, ya sea Estado nacional o extranjero, capitalismo extranjero o incluso ayuda internacional, que no permite la formación de un sistema político pluralista y que tarde o temprano se convierte en un obstáculo tanto para la democracia como para el desarrollo.

Lo que hemos aprendido de este siglo que termina es que las marchas forzadas hacia la modernidad y la independencia conducen al fracaso, al subdesarrollo y al fortalecimiento de la dependencia. Cómo no estar convencidos de ello después de la caída del imperio y la sociedad soviéticos que quisieron construir autoritariamente una sociedad y un hombre nuevos sobre una infraestructura técnica y económica moderna, y después de la descomposición de los regímenes nacionalistas más extremos, los cuales, en nombre de la identidad o la pureza, hundieron a sus países en una crisis económica de la que hasta ahora no han conseguido salir. Lo que hace difícil el análisis de estos procesos es que se desarrollan a lo largo de un período muy extenso. Es verdad que la economía soviética se modernizó hasta la década de 1970 y que China popular obtiene resultados económicos impresionantes bajo un régimen muy distante de la democracia, pero el pasaje por el Estado nacionalista o revolucionario autoritario no puede ser sino una etapa provisoria en el camino del desarrollo. O bien este Estado ayuda por sí mismo a la maduración y la emancipación de la sociedad civil, o bien devora a la sociedad y hace imposible el desarrollo en la misma medida que la democracia. En este fin de siglo varios países viven una situación intermedia, pero es preciso que ésta sea reconocida como tal. China, Vietnam o Cuba no podrán combinar durante mucho tiempo un gobierno autoritario y una economía abierta, y el partido comunista chino no puede ser tenido por el actor principal de la modernización acelerada de una parte del país. A largo plazo, democracia y desarrollo deben asociarse, aunque en el mediano plazo una fuerte modernización pueda ser realizada por —o a pesar de— un régimen autoritario. Tales regímenes no son más que compromisos inestables entre el Estado totalitario, incompatible con el desarrollo, y la democracia asociada a éste, que también puede degradarse y no garantizar ya su papel de enlace entre el Estado y los actores sociales.

No obstante, este tipo de razonamiento debe reconocer que su aplicación se enfrenta a una limitación histórica que, por una aparente paradoja, concierne sobre todo a Europa occidental, pues ésta, hogar principal de la modernización durante siglos, experimentó durante un largo período regímenes autoritarios, y en ella la monarquía absoluta estuvo asociada a la vez al Estado de derecho y al progreso del comercio y la industria. Ni Venecia ni Florencia fueron democracias, y no puede calificarse de democráticas a la Francia de Napoleón III, a la Alemania de Bismarck o a la Rusia de Stolypin. Vayamos más lejos: ¿puede llamarse democrático un desarrollo capitalista que no sólo se basa en el poder de los empresarios como sus únicos agentes, sino que explica el comportamiento de éstos por motivos privados, ya se trate de la búsqueda del beneficio personal, la constitución de un patrimonio o una vocación, como lo pensó Max Weber? Si lo que explica la modernización

económica es un tipo de conducta de la elite dirigente, es que aquélla no está asociada a la democracia.

En efecto, lo propio de la experiencia europea es que durante mucho tiempo conoció una movilización social muy limitada. Jean Fourastié demostró de manera cautivante que fue recién a fines del siglo XIX cuando el nivel de vida de los asalariados se elevó rápidamente y de manera prolongada, por lo tanto después de un período muy largo de modernización económica y administrativa. Ésta se produjo en una inmovilidad social relativa, que fue mucho más acentuada en el este que en el oeste del continente, y que en Prusia o en Rusia asoció la economía de mercado a relaciones de producción precapitalistas, lo que también ocurrió en la economía de plantación de las regiones tropicales.

De ahí la importancia de los intelectuales que durante mucho tiempo representaron indirectamente a los “pueblos” confinados en una dominación sufrida y privados de expresión política libre. La democracia fue entonces más una teoría que una práctica, un llamado al pueblo ausente más que una acción del pueblo presente. En el mundo contemporáneo se van reduciendo esas zonas de silencio popular y de concentración de la acción democrática en contraelites intelectuales y políticas, como lo fueron, apenas ayer, los estudiantes de Tien An Men en Pekín. Tanto el mundo islámico como el continente latinoamericano conocieron, al contrario, una movilización política de las poblaciones, que asumió formas nacionalistas, étnicas o religiosas pero que hace imposible la democracia elitista o el papel de las elites democratizantes y revolucionarias que fue de tanta importancia en las sociedades europeas.

Es en Estados Unidos donde se operó el pasaje del conjunto Estado central - burguesía capitalista - sociedad jerarquizada al conjunto democracia - producción masiva - consumo ostentoso. Es por eso que los pensadores americanos fueron, con tanta razón, sensibles a la asociación de la democracia y el desarrollo, mientras que los modelos soviético y nacionalista conservaron la idea de que el desarrollo era la obra de una elite dirigente que tomaba a su cargo los intereses de la sociedad y se reservaba el monopolio del poder al mismo tiempo que el de los privilegios. En consecuencia, la crítica hecha aquí a la concepción liberal de la modernización no apunta en modo alguno a volver a una concepción estatista y voluntarista del desarrollo sino, al contrario, a salir de la oposición demasiado brutal del voluntarismo y el liberalismo, asociando estrechamente desarrollo y democracia, como logró hacerlo Europa bajo la doble influencia de las políticas socialdemócratas y el pensamiento keynesiano.

Crisis y autoritarismo

La situación más favorable a la democracia es aquella donde unos movimientos sociales están en conflicto por la gestión de los principales recursos culturales de una sociedad; es entonces cuando lo que denominé un sistema de acción histórica tiene la existencia más vigorosa. La democracia es el resultado de esta doble orientación de los actores históricos y los movimientos sociales: se oponen unos a otros pero apuntan también a los mismos valores culturales. Es por esa razón, dije, que las democracias más fuertes se constituyeron en las sociedades industriales más netamente

estructuradas en torno del conflicto de clases propio de la sociedad industrial. En Francia, en cambio, las luchas sociales estuvieron siempre subordinadas a unas luchas más globales cuya apuesta fue el Estado, luchas entre republicanos y monárquicos o entre clericales y anticlericales, lo que produjo una sobrecarga ideológica de los conflictos sociales, como si cada uno de ellos encubriera un enfrentamiento más fundamental y sin compromiso posible entre el pasado y el futuro o entre la razón y la cultura.

En las situaciones de crisis se asiste a una destrucción de las relaciones sociales, de los conflictos y de los movimientos sociales, y a su reemplazo, a la vez, por la defensa de intereses puramente privados y por una relación global con el Estado del que se espera todo o al que se rechaza completamente. Cuando los adversarios ya no pueden enfrentarse sobre un terreno sólido, y en especial cuando ya no pueden discutir acerca del reparto de los bienes gananciales, las fuerzas sociales se descomponen, los partidos o los sindicatos se debilitan, una parte de los ciudadanos se hunde en la apatía o se encierra en la protección de sus intereses inmediatos, mientras que otra deposita su confianza en un líder que, según el análisis clásico de Freud, establece un vínculo personal directo con cada uno de los miembros de la muchedumbre desestructurada, al mismo tiempo que las minorías se rebelan o se retiran de la vida pública.

Las teorías revolucionarias afirmaron a menudo que era en las situaciones de crisis extrema cuando estallaban las luchas de clases y cuando, más allá de juegos políticos que se volvían irrisorios, entraban en escena los actores colectivos de la Historia, preparando el triunfo de una revolución popular. Los errores de esta concepción se demostraron trágicamente en el transcurso de este siglo. Fue a causa de que la Rusia de 1917 estaba más en crisis que en una situación revolucionaria que una vanguardia tomó el poder y no lo entregó jamás al pueblo; fue inmediatamente después de la gran crisis de 1929 cuando la mayoría de la población alemana se dejó arrastrar por Hitler y la acción violenta de los SA y el partido nacional socialista, haciendo de los judíos los chivos expiatorios de la crisis nacional. Eugenio Tironi tiene razón al analizar la solidez del régimen de Pinochet, que se mantuvo 16 años en el poder e hizo adoptar una constitución, por la degradación de los partidos políticos y los sindicatos, consecuencia de la crisis de hiperinflación y desorganización de 1972-1973. Si la crisis es limitada y la sociedad sólida, esta desorganización política puede ser portadora de un espíritu democrático. Tal es el caso de Italia en 1992-1993, que exige la construcción de una verdadera sociedad política nacional y la destrucción de la mafia que se volvió odiosa a causa de los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino, pocos años después del homicidio del general Dalla Chiesa. Pero cuando la crisis es más grave, cuando un gran número de personas ya no tienen confianza en que los poderes públicos garanticen su situación y su futuro, la democracia es puesta en peligro por el llamamiento a un líder. Éste puede ser demócrata, como lo fue el general De Gaulle, que habría podido convertirse en dictador en 1958 y constituirse en el defensor de la Argelia francesa pero que, al contrario, eligió fortalecer las instituciones republicanas y preparar la independencia de Argelia. Pero esta situación, que se explica ante todo por el papel de defensor de las instituciones democráticas desempeñado por el general De Gaulle durante el período de la Ocupación y contra el gobierno de Vichy, es excepcional. Una crisis produce apatía, conformismo, entusiasmo al servicio de un salvador antes que una participación activa y el fortalecimiento del

debate político. Del caos no sale el pueblo fénix, no se liberan las fuerzas profundas de la sociedad. Muy por el contrario, los movimientos sociales sólo se forman en las sociedades de fuerte historicidad, y ésta no se reduce a cambios económicos y sociales rápidos; implica una fuerte organización de las relaciones sociales, gracias a la cual cobran forma las acciones colectivas, los conflictos sociales y su tratamiento institucional. Una sociedad en crisis no tiene la capacidad de encarar sus problemas y preparar cambios controlados; se descompone y es del exterior, en especial de un orden impuesto, de donde espera la solución de los problemas que no siente que el sistema político sea capaz de resolver.

Después de la Segunda Guerra Mundial, una gran parte del mundo creyó en una modernización sin fin y en una activación paralela de los actores históricos. Una generación después, esas esperanzas se habían desvanecido, brutalmente en muchos países del sur, más gradualmente en los del norte. Con la llegada de la década de 1990, esta conciencia de crisis se acentúa en los países industrializados y en particular en Europa occidental, mientras que en algunos países del sur se esboza una recuperación, que incluso se acelera fuertemente.

Contemplamos entonces el ascenso, en los países industriales ricos, de fuerzas incontroladas. Se señala a los inmigrantes como chivos expiatorios, se vive en estado de inseguridad, estallan tumultos en los barrios pobres de las ciudades; el sistema político parece impotente para conjurar las amenazas exteriores y dirigir la recuperación económica o para hacer que el país salga de una crisis nacional. Es entonces cuando se acentúa la crisis de representación y participación democráticas, cuando se critica y rechaza a los partidos, cuando los sindicatos se debilitan, cuando ya no se escucha a los intelectuales y desaparecen los grupos de iniciativa local que habían dado tanta fuerza a la grassroots democracy de las décadas precedentes.

En los países en desarrollo, es decir alejados del desarrollo endógeno, en general la crisis es más grave, ya que refuerza la situación misma de subdesarrollo. Es muy grande por lo tanto el riesgo de ver cómo es rechazada la democracia por pueblos que se remiten a un piloto autoritario para salir de la tempestad.

El vínculo de la crisis y el autoritarismo es la contrapartida del que une desarrollo y democracia. No es la democracia la que produce la crisis de donde sale un régimen autoritario, y nada autoriza a llamar democracia a la desorganización del sistema político invadido por los grupos de interés, los partidos o la corrupción. Al contrario, la crisis nace de la impotencia del sistema político para manejar unos cambios difíciles o arbitrar entre demandas sociales en conflicto, y los regímenes autoritarios entran en crisis con más facilidad que los democráticos.

Es por eso que los demócratas no pueden contentarse con condenar todos los regímenes autoritarios porque algunos de éstos responden a una crisis al mismo tiempo que destruyen un régimen democrático. Aun cuando sean verdaderamente democracias las derrocadas, es preciso también analizar las razones de su derrota, la naturaleza de la crisis que representan el derrumbe militar o la catástrofe económica.

Vayamos más lejos: un régimen autoritario, lo mismo que una revolución —y las dos categorías de acción política se mezclan cada vez más a menudo-, pueden preparar la evolución democrática a la que sin embargo combaten. Tal fue el caso de la Argentina peronista. Gino Germani, a pesar de ser muy liberal, había comprendido con claridad que la ruptura autoritaria había intervenido precisamente en el momento de una ampliación brusca de la participación política. Esto no conduce en modo alguno a calificar como democrático a un régimen autoritario sino, al contrario, a negar esta calificación tanto a una dictadura populista como a un régimen que se pretende democrático simplemente porque procede a efectuar elecciones en las que se enfrentan dos clanes de la oligarquía o representantes de grupos de interés.

Para un país, hay muchas maneras de no ser democrático. La partitocrazia italiana o la corrupción que imperaba antaño en tantas ciudades americanas y en especial en Tammany Hall, Nueva York, no eran sino caricaturas de democracia, mientras que no se puede desdeñar la intención democrática de Lenin, aunque el régimen que creó fue, incluso en vida de él, antidemocrático. Una definición exigente de la democracia lleva a ser más crítico con respecto a regímenes que reconocen ciertos derechos políticos, y menos con respecto a otros que hacen aparecer o reconocen algunas de las dimensiones constitutivas de la democracia. Si bien no hay democracia sin respeto por los derechos fundamentales, sin representación de los intereses de la mayoría y sin ciudadanía, existe una gran diversidad de regímenes cuya acción respeta uno solo de estos principios al mismo tiempo que destruye los otros dos. Ninguno de estos regímenes puede ser considerado democrático, de igual modo los que no hacen más que organizar unas elecciones relativamente abiertas como los que recurren al pueblo en su totalidad o los que reducen el derecho natural al derecho de propiedad. Hay que saber condenar los componentes antidemocráticos de los regímenes que se pretenden democráticos, pero también hay que reconocer la presencia, tanto en movimientos revolucionarios como en regímenes censatarios o Estados populistas, de llamados a la democracia que sacuden un orden que prohibía la acción autónoma de todos los actores sociales. El análisis de situaciones históricas particulares debe combinar los juicios críticos contra una acción autoritaria con el reconocimiento de una voluntad de liberación sin la cual la democracia nunca triunfaría.